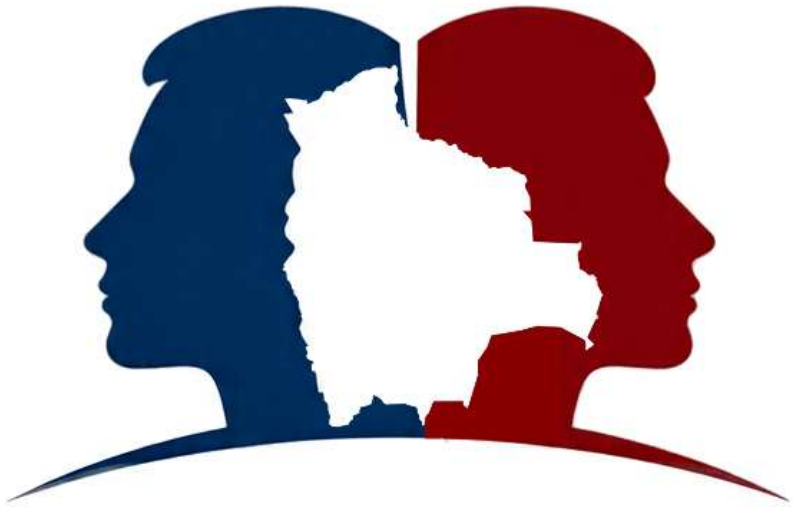
Fundación Milenio



Una nación bifurcada

La cuestión de la identidad boliviana

Autores:
Fundación Milenio

Octubre de 2026

Serie Análisis Nº 43

Una nación bifurcada. La cuestión de la identidad boliviana*

Todas las naciones se enfrentan a amenazas recurrentes a su existencia, a las que, en un momento u otro, acaban sucumbiendo. Pero algunas, aun estando igual de amenazadas son también capaces de aplazar su desaparición frenando e, incluso, invirtiendo los procesos de declive y renovando su vitalidad y su identidad.

Samuel Hungtington**

* Artículo elaborado por el equipo de investigadores liderado por Henry Oporto, con la colaboración de Nicolás Oporto Rivera y Alex Chipana.

** HUNTINGTON, S.P.: *¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense*. Paidos Estado y Sociedad, México, 2004, p.21.

Abstract

El expresidente e historiador Carlos Mesa ha sugerido un paralelismo entre el escenario de crisis política de 1925, cuando el país se aprestaba a celebrar el Centenario de la República[1], con el actual escenario de crisis económica e incertidumbre política que se repite cien años después, al cumplirse el Bicentenario de Bolivia. Estos episodios traumáticos dicen mucho de nuestras dificultades, como país, para gestionar los cambios de gobierno. Son también instructivos sobre los conflictos en la sociedad boliviana que permanecen irresueltos, unas veces latentes y otros manifiestos.

De hecho, Bolivia recordó su Bicentenario inmersa en una coyuntura de crisis que se despliega en varios planos, y con muchos nubarrones en el horizonte. Los bolivianos afrontamos dilemas cruciales. Algunos se relacionan con la agonía de un ciclo político y el advenimiento de otra etapa de la vida nacional, cuyos rasgos, empero, aún no entrevemos con claridad. En ese entorno complejo, ojalá que la implosión del régimen populista y

[1] Las elecciones de mayo de 1925 dieron como ganador al candidato oficialista José Gabino Villanueva, pero en agosto el Congreso anuló las elecciones (a instancias del presidente en funciones Bautista Saavedra), eligiendo en su lugar a Felipe Segundo Guzmán como presidente interino; un interinato marcado por innumerables tensiones, hasta una nueva elección en diciembre, de la que salió elegido Hernando Siles.

autocrático -que ha imperado por dos décadas- no nos prive de identificar la naturaleza de los nuevos desafíos que trae consigo la transición.

Esta ponencia analiza la crisis de identidad nacional que vive la sociedad boliviana, así como las raíces culturales e ideológicas de la polarización prevaleciente desde principios de este siglo. Ello da cuenta de una sociedad fracturada por grietas étnico-culturales, tensiones políticas, quiebres sociales, brechas regionales y diferentes visiones de país y de futuro. Fractura que se entrelaza con la disgregación de la representación política que socaba las condiciones de gobernabilidad.

La tesis que defendemos es que para superar tales cuestiones es preciso retomar el objetivo histórico de la consolidación de la Nación boliviana; esto es, de una comunidad nacional que se reconoce y actúa como tal, por encima de otras identidades parciales o más limitadas, como son las identidades étnicas, clasistas, regionales, corporativas, religiosas, de género u otras. En ese sentido, dar un nuevo impulso al proceso de construcción nacional, fortaleciendo la identidad común de los bolivianos, es un reto capital para encauzar con éxito una segunda transición democrática. Ello, a su vez, plantea la cuestión de cómo articular un nuevo contrato social para una convivencia constructiva que posibilite gobernar con orden, legalidad, diálogo y consensos básicos en la sociedad.

Es también en el marco de un nuevo contrato social que adquiere trascendencia la redefinición de la política exterior de Bolivia, reivindicando el interés económico y geopolítico boliviano de gravitar tanto en el Pacífico como en el Atlántico, consecuentemente con su vocación histórica de ser un *país de contactos*.

Las dos Bolivias

A la vista de nuestra historia, y de un presente signado por la polarización, la metáfora de las “dos Bolivias” no es descabellada. Al contrario, se diría que hace justicia a la realidad de una sociedad fracturada y con un desencuentro notorio de los sectores sociales, actores políticos y territorios que han protagonizado los conflictos de las últimas dos décadas y que ahora tienen el dilema de cómo reconstruir un marco de cohesión y estabilidad sin el cual el país podría quedar atrapado en un círculo de inestabilidad y atraso.

Una Bolivia se configura alrededor de las clases medias urbanas y los estratos sociales altos, de la economía formal y empresarial y de las fuerzas regionales emergentes (principalmente la región de Santa Cruz) y sus áreas de influencia. La otra se articula en torno de las poblaciones rurales, indígenas y provinciales, los estratos cholo-mestizos de las ciudades —sobre todo del occidente del país—, y especialmente de la gran urbe aymara de El Alto.

Aquella Bolivia se identifica mucho más con los valores de la modernidad y la tradición republicana, defiende la libertad política y económica, la iniciativa individual y privada y la inserción del país en el mercado internacional y la globalización. La segunda se aferra a tradiciones comunitaristas e identidades étnicas y corporativas; su ecosistema de vida gira en torno a la economía informal, que es donde se concentra mayormente la pobreza, pero donde también emerge una nueva clase media popular y grupos de empresarios cholo-indígenas prósperos que le plantan cara a las élites tradicionales.[2]

La fractura nacional está atravesada por diferencias culturales que se reflejan en visiones de país distintas en muchos aspectos, y también en modos diferentes de entender las relaciones entre el individuo y la comunidad, el ciudadano y el Estado, el hombre y la naturaleza, el concepto de propiedad, el rol de la familia y las relaciones de género, así como en nociones divergentes sobre la importancia de los derechos y las responsabilidades, la libertad y la autoridad, la igualdad y la jerarquización. Estas diferencias de valores y creencias —fruto de las condiciones y trayectorias específicas que los pueblos y regiones de Bolivia han seguido en su conformación histórica— se manifiestan en modos de ser que son característicos de cada una de esas dos Bolivias y distintos en muchos rasgos idiosincráticos. De ahí el concepto de Bolivia de ”sociedad abigarrada”, enunciado por Zavaleta;[3] que refiere la presencia de colectividades diferenciadas entre sí por su historia, su lengua, sus culturas y tradiciones, sus valores e instituciones e, incluso, por sus propias prácticas religiosas dentro de la misma tradición cristiana.

Desde luego, tales diferencias no son absolutas e inalterables.[4] La convivencia a lo largo de varios siglos dentro de la geografía boliviana; las interacciones comerciales y humanas, los entrelazamientos étnicos y raciales, las mezclas familiares, los procesos migratorios, las historias comunes; todo ello, y mucho más, han dado lugar a la creación de una cultura compartida y una identidad común que, naturalmente, atenúan las diferencias étnico-culturales y regionales, pero sin llegar a integrarlas plenamente. De esta manera la sociedad

[2] El hecho de que en los sectores populares y estratos bajos el consumo de bienes tecnológicos y otros productos de la cultura moderna esté muy extendido, tanto como las aspiraciones de modernidad, no debe llevar a subestimar la fuerza de las culturas tradicionales y de las identidades asociadas con ellas. Esto podría explicar la fuerte identificación que estos sectores desarrollaron con el MAS, incluida la llamada burguesía cholo-aymara que tendría razones económicas para recelar de un proyecto político estatista y con vocación totalitaria, que restringe la libertad económica y de comercio y constituye una amenaza a la propiedad y el capital existente en la economía informal.

[3] ZABALETA, R.: *La formación de la conciencia nacional*, Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1990.

[4] También es cierto que los rasgos culturales son menos mutables que las de tipo político y económico. Esto tiene varias implicaciones. Una de ellas es que cuando se presentan conflictos entre pueblos con distintas culturas, es mucho más difícil llegar a compromisos o soluciones concertadas, ya que las diferencias culturales se generan a un nivel mucho más básico y emocional que las diferencias de ideologías y posiciones políticas

boliviana se caracteriza no sólo por su pronunciada diversidad -en realidad todas las sociedades son diversas en distinto grado- sino, ante todo, por la fuerza y gravitación de las identidades subnacionales con respecto a la identidad nacional.[5] Esto último ha dejado secuelas sustanciales. Una muy relevante es que, en determinadas circunstancias históricas y políticas —por ejemplo, de intensa polarización interna—, el estallido de las diferencias y de las identidades particulares puede desplazar y socavar significativamente la identidad nacional. La consecuencia es que el sentimiento de comunidad nacional, y la noción de interés general y de bien común terminan desvaneciéndose.

Considérese que ésta es una situación recurrente en países que no han conseguido constituirse como Estados nación; o solo a medias o que mantienen cuestiones nacionales irresueltas, como es el caso de Bolivia. De hecho, en nuestra historia sobresalen coyunturas de extrema polarización que han conducido no únicamente al derrumbe del sistema político sino, incluso, a episodios de guerra civil. En situaciones menos extremas —y esto se ha repetido una y otra vez en décadas recientes— la confrontación entre actores bolivianos ha dado pie a una lógica de bloqueo mutuo, con repercusiones sobre la estabilidad y gobernabilidad del país. De ahí por qué pienso que un problema crucial, de fondo, que atraviesa la política boliviana en distintos momentos históricos y que ha recrudecido con fuerza desde principios de este siglo, es una crisis de identidad nacional, que incuba riesgos potenciales y eventualmente graves.

No ignoro que la hipótesis de las dos Bolivias puede parecer simplificadora de una realidad más compleja. Y lo es, de hecho. No obstante, es útil para entender la lógica subyacente a ciertos patrones de comportamiento individual y social. Y lo es también para comprender la naturaleza de la sociedad boliviana, sus problemas y desafíos. Por cierto, las dos Bolivias no son bloques homogéneos, ni mucho menos. Hay distintos grados de heterogeneidad, tanto como elementos culturales comunes en una Bolivia y otra. Por lo demás, la noción de las dos Bolivias no entraña una delimitación social o geográfica nítidamente definida. Su fundamento tiene que ver no tanto con un tipo de estratificación socioeconómica como con identidades étnicas o culturales que, por definición, son fluidas. Bien es cierto que las

[5] Para quienes piensan que el mayor contacto e interacción entre los pueblos y regiones de Bolivia, desde los años cincuenta, tendría que ser un factor que atenúa las diferencias culturales y que, por tanto, alienta y facilita los procesos de asimilación o integración cultural, hay que decirles que no siempre el resultado llega a ser ése. De hecho, muchas veces sucede lo contrario, puesto que esa mayor interacción puede también generar una mayor conciencia hacia la cultura de origen, así como una sensibilidad mayor en la percepción de las divergencias entre culturas o pueblos con tradiciones culturales diferentes (sobre todo ahora que el celular y los medios de comunicación permiten a los migrantes mantenerse en contacto con sus familias y comunidades y, en consecuencia, no desarraigarse completamente).

personas y grupos sociales pueden redefinir su identidad, y de hecho lo hacen, de modo que su composición y alcances socio geográficos puede experimentar cambios.

La fuerza de las dos Bolivias pareció cobrar mayor notoriedad desde el ascenso al poder de Evo Morales y el MAS en 2006. De hecho, su proyecto político se perfiló como negación de la idea de nación boliviana y, en gran medida, de la posibilidad de consolidar un país social y culturalmente integrado; más bien apunta a someter a la otra parte de la sociedad a la hegemonía del bloque etnonacionalista que tomada control del Estado. De ahí que el país haya vivido en el tiempo reciente con el alma desgarrada, en un contexto de alta conflictividad y polarización.

Como se sabe, la polarización política e ideológica, particularmente en los países democráticos o en los que aspiran a serlo, es una de las cuestiones novedosas de esta era. Moisés Naín[6] enfatiza que la polarización es instrumentada por políticos (sean de izquierda o derecha) de talante autocrático como una estrategia para detentar el poder, concentrarlo y reproducirlo, sembrando la discordia, demonizando a los adversarios, enfervorizando a los seguidores y creando lealtades fuertes a base de explotar resentimientos, viejos agravios o demandas identitarias. Sería la vieja estrategia de la búsqueda constante del enemigo interno y externo. También se observa que son los países con cuestiones nacionales irresueltas, los que más fácilmente pueden deslizarse hacia una polarización destructiva. Esta sería la situación nuestra: una sociedad con identidad nacional frágil y con un proceso de construcción nacional inconcluso.

Ahora bien, si la polarización en Bolivia tiene raíces históricas, como es fácilmente verificable, no es menos cierto que su manipulación como estrategia de poder le permitió al MAS crear una base social amplia, organizada y fidelizada, esgrimiendo un discurso de identidad indígena que ha marcado fronteras entre “nosotros” y “ellos”, exacerbando las diferencias socioculturales, avivando rencores y levantando muros de incomunicación; como ocurre, por ejemplo, en el modo en que se relacionan Santa Cruz y El Alto —los dos polos emblemáticos de las dos Bolivias—, prevaleciendo la desconexión, los recelos y desconfianzas recíprocas de sectores y grupos influyentes, a despecho de las oportunidades existentes para desarrollar vínculos estrechos y cooperativos y de beneficios mutuos, dada la complementariedad natural de sus economías.

[6] NAÍM, M.: La revancha de los poderosos. Cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI. Debate, Buenos Aires, 2022.

Lo cierto es que los muchos años del MAS en el poder, sus sucesivas victorias electorales, incluso con mayoría absoluta de votos, no se entienden sin la eficacia de la política identitaria y polarizadora. Esto no lo explica todo, por supuesto. También se debe considerar que el régimen populista se vio muy favorecido por el viento de cola en la economía derivado del ciclo de precios extraordinarios de las materias primas que llenaron los caudales del Estado con ingresos enormes para financiar una extensa red clientelista y prebendaria de sustentación. Lo incontrastable es que la combinación de excedentes fiscales y de polarización étnica le dio al MAS fortaleza política para neutralizar y mantener a raya la resistencia y oposición de la otra Bolivia, de aquella que la retórica masista ha etiquetado como "derecha", "neoliberales", "oligarquías", "*q´haras*".

Pero ese tiempo ha mudado, y mucho. Ahora el rostro de la economía luce distinto, con la actividad económica estancada, inestabilidad macroeconómica, alto déficit fiscal, deuda pública abultada, reservas internacionales en el suelo, escasez agobiante de dólares y combustibles y una serie de demandas sociales que no pueden ser atendidas. Por si fuera poco, el presidente Luis Arce ha conducido en el último quinquenio un gobierno débil, con un partido (el MAS) dividido y confrontando internamente, carente de mayoría parlamentaria, lidiando con la oposición feroz del mismo Evo Morales en la disputa del liderazgo partidario y de la candidatura oficialista para los comicios de este año, y cada vez más acosado por el poder del narcotráfico y el crimen organizado. Es así como el régimen populista ha implosionado y colapsado y, con ello, el modelo de gobernabilidad autoritaria. Como consecuencia, ha estallado una crisis política que, a su vez, es el máximo escollo para remontar la crisis económica.

En realidad, asistimos al ocaso de un sistema político dominado por un partido mayoritario al que le tocó gestionar un tiempo de estabilidad política y económica, ya lejano. El final de este ciclo es la vuelta a una de sus tradiciones más arraigadas: la prevalencia de tendencias centrífugas, disgregadoras y faccionalistas que han determinado el carácter de las luchas sociales y políticas y socavado las posibilidades de un orden estable, legítimo y democrático. De hecho, la fragmentación ha sido el rasgo distintivo de la oposición política al MAS y uno de los escollos para la conformación de una alternativa de poder. Lo novedoso es que la fragmentación se ha instalado también en el seno del partido de Morales.[7]

Desde luego que la fragmentación no tiene por qué ser siempre una fuerza negativa en el desarrollo político de una nación. Incluso hasta podría ser propicia para la democratización

[7] Para profundizar sobre este tema, véase mi libro: *El ocaso de un ciclo de hegemonía electoral y la perspectiva de polarización y fragmentación*. Fundación Pazos Kanki, La Paz, 2023.

de un sistema político y estatal verticalista y despótico. El problema radica en la atomización y debilitamiento de la representación política. Este fenómeno tiene efectos perniciosos en ausencia de instituciones sólidas y un orden de legalidad que pueda regular y contener el desborde anárquico del conflicto social. Y tanto más por la falta o la pérdida de una cultura política de diálogo, negociación y construcción de pactos y coaliciones.

Por cierto, el quiebre político del MAS no elimina el clima de polarización[8], que, como ya se dijo, no sólo es ideológico sino cultural. Más aún, hay que decir que en el despuntar del siglo XXI la clave para comprender las causas centrales de los grandes conflictos es menos la ideología que la cultura. Esto lo ha explicado muy bien Samuel Huntington, al sostener que la cultura se ha convertido en el nuevo principio ordenador de la política, de manera que las líneas de fractura, alineamiento, enfrentamiento o cooperación de los actores políticos y sociales ya no encuentran su causa última en la rivalidad ideológica. Para este autor, cuando las identidades étnicas o culturales adquieren más relevancia que las identidades nacionales y la principal razón del conflicto es de índole cultural, la pregunta prominente para los individuos es *"quién eres"* y no -o no tanto- *"de qué lado estás"*, como cuando los conflictos que predominaban eran ideológicos y políticos.[9]

Otro autor que ha analizado la prominencia de la cuestión de la identidad es Francis Fukuyama, afirmando que:

> *«La identidad centra la necesidad natural de la gente de que se reconozca su dignidad y proporciona el lenguaje adecuado para expresar los sentimientos de agravio cuando no se les proporciona ese reconocimiento».*[10]

Fukuyama sostiene que la política de identidad encarna, precisamente, la lucha por el reconocimiento, la cual ha estado presente a lo largo de la historia humana como un motor de cambios. No obstante, también subraya la amenaza que representa la defensa cerrada

---

[8] Un estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), publicado en julio de este año, que consulta las opiniones de actores políticos, periodistas y analistas, halló que un 68,9% veía un país ideológica y políticamente polarizado, aunque confiaba en que pudieran resolverse las diferencias pacíficamente; un 21,9% señaló que por la fuerte división "el enfrentamiento es inevitable entre bolivianos". Y si bien es posible que los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales del pasado 17 de agosto, que favorecieron el pase a segunda vuelta de dos candidaturas opositoras al MAS, puedan ser percibidos por muchos como el fin de la polarización, es prematuro sacar esta conclusión. El potencial de polarización no ha desaparecido, tiene fuertes raíces, como lo intento demostrar en esta ponencia.

[9] Véase, PALACIO, J. del (selec.): *¿El choque de civilizaciones? Y otros ensayos sobre Occidente*, Alianza editorial, Madrid, 2020, p.58.

[10] FUKUYAMA, F.: *Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento*. Ediciones DEUSTO, Barcelona, 2019, p.26.

de ciertas identidades colectivas basadas en la raza, la etnia, la religión, la cultura o el género, que tienden a disgregar la sociedad en grupos más reducidos y en movimientos identitarios excluyentes. Esta evidencia imposibilitaría construir identidades más amplias e integradoras como la identidad nacional y sin la cual el camino del desarrollo y el consenso sobre la legitimidad del sistema político se torna más difícil o simplemente quimérico. Añade, que las demandas de identidad son difícilmente negociables por la intensa carga emocional que conllevan, y más todavía cuando se centran en el victimismo y el resentimiento, lo que refuerza la polarización e impide la deliberación y la acción colectiva del conjunto de la sociedad.

En la experiencia boliviana, esto se ha puesto de manifiesto con la política de identidad e indigenización étnica desplegada por el MAS, y que en gran medida es responsable de la grieta actual en la sociedad boliviana, así como de la erosión de la identidad nacional. Pero no es lo único, puesto que también ha tomado impulso un movimiento de identidad cruceñista, en lo que sería una reacción al etnonacionalismo del MAS, pero afincada en el discurso de identidad regional.

Así las cosas, el nuevo tiempo político que se perfila podría estar signado por el solapamiento de la fragmentación y la polarización, en una sociedad dividida. En este contexto, es preciso poner sobre el tapete cuestiones fundamentales para el futuro del país: ¿Qué tipo de dinámica política sucederá a la etapa de confrontación polarizada desplegada por el MAS, cuando operaba como fuerza mayoritaria y dominante? ¿Es posible sortear el peligro de un faccionalismo conducente al caos y la ingobernabilidad? ¿Cómo superar la crisis de una identidad común entre los bolivianos y retomar el proceso de construcción nacional con una perspectiva renovada de descentralización, inclusión social e inserción activa en el mundo? ¿Cómo articular un nuevo contrato social entre el Estado, los ciudadanos y las regiones, estableciendo un marco de convivencia pacífica y democrática?

La erosión de la identidad nacional

Para Bolivia, lo mismo que para muchos otros países del mundo, la formación de la identidad nacional ha constituido un proceso histórico complejo, que se ha dado a través varios hitos y momentos diversos, a veces traumáticos, hasta adquirir características distintivas y singulares. Recapitulemos esquemáticamente esta trayectoria.

El Alto Perú, origen de la República, sentó las bases materiales y subjetivas de la nacionalidad boliviana. La sociedad altoperuana desarrolló una identidad local que coexistió

con una identidad común a los otros centros americanos pertenecientes al sistema colonial español. Las luchas por la independencia en América fortalecieron entre los criollos y mestizos la conciencia americana, pero en tensión permanente con las identidades locales de las poblaciones que conformaron los virreinatos, las provincias, las audiencias, las capitanías y otras divisiones administrativas.

La fundación de Bolivia fue un momento estelar en la creación de la conciencia colectiva de una identidad nacional específica y diferenciada de las identidades de las repúblicas vecinas. Sin embargo, apenas cumplido el acto fundacional, la prominencia de la naciente identidad boliviana se vino abajo y tuvo que enfrentar, por los siguientes decenios, amenazas y desafíos sucesivos. De hecho, en las primeras décadas de la República, los grupos dominantes siguieron debatiendo acerca de si Bolivia debía ser un Estado independiente o si su futuro estaba más bien en anexarse o formar una asociación con alguno de los estados vecinos, de modo que sus lealtades parecieron repartirse entre esas alternativas. A lo largo de todo el siglo XIX, y prácticamente hasta la Guerra del Chaco, las identidades localistas y de índole racial, étnica y cultural, prevalecieron con respecto a una difusa y elusiva identidad boliviana. Ni siquiera las invasiones extranjeras ni los conflictos bélicos con los vecinos fueron suficientes para unificar a todos los bolivianos. Es más, esos conflictos reavivaron viejas rencillas y abrieron otras nuevas. Bolivia siguió siendo una totalidad desarticulada, sin cohesión ni propósito común a la Nación que se propuso ser.

Quizás el único legado profundo de la Guerra del Pacífico, en términos de la construcción de la identidad nacional, haya sido el posicionamiento de la figura de Chile en el imaginario colectivo como el “enemigo histórico”, autor del despojo marítimo y “causante” conspicuo del atraso nacional. La imagen de Chile como “enemigo” ha sido uno de los aspectos recurrentes de la identidad boliviana que ha nutrido una autopercepción victimista en la relación con los extranjeros y que, en esa dimensión, cumple el papel del “otro” externo frente al cual los bolivianos tienden a definir su identidad nacional.

Durante una larga etapa histórica la identidad de la naciente Nación boliviana se definió básicamente en términos étnicos y raciales. La República heredó de la Colonia un sistema de segregación racial, cultural, social y política, manteniéndose las brechas internas e impidiéndose, de suyo, la formación de una comunidad nacional. La clase dominante se concibió así misma como un estamento de criollos blancos de ascendencia española, en contraposición tajante y absoluta con la población indígena. En su visión de Nación a lo sumo cabían los mestizos como otro estamento subordinado dentro de una estratificación rígida, típica de las concepciones sociales de la época. Los criollos y mestizos identificaron su cultura con referencia a la cultura europea y negaron reconocimiento a las culturas

nativas, las cuales para sobrevivir optaron bien por resistir, bien por adaptarse, asimilarse o mimetizarse en la cultura oficial y dominante. Con ello, empero, se inició el sincretismo cultural que se ha desarrollado a medida que el mestizaje racial y étnico ha ido ganando mayor densidad social.

Pero no fue sino hasta la Guerra del Chaco que ese sistema de poder y organización social entró en descomposición. Como tantas veces se ha dicho, aquel conflicto bélico fue un primer hecho "nacionalizador" y el verdadero detonante de lo que Zabaleta llamó *«la formación de la conciencia nacional»*.[11] El "infierno verde" hizo posible el encuentro de los bolivianos en todas sus capas sociales, incluyendo la población indígena movilizada para defender una Patria que, paradójicamente, no la reconocía ni incluía. Ese episodio dejó huellas profundas en la manera en que, a partir de entonces, los bolivianos han asumido su identidad colectiva. La Revolución Nacional fue el desemboque de un proceso de ascenso popular, bajo la forma de un movimiento político y social orientado a remodelar la República con arreglo a las características sociológicas de un país social, cultural y regionalmente diverso, encarnado en un objetivo unificador: el Estado Nacional.

Construir el Estado-Nación es la cuestión que la independencia republicana no había podido resolver hasta entonces. En la idea del Estado Nacional cristalizaron las esperanzas de un cambio social que debían democratizar las estructuras políticas, económicas y sociales, para incorporar a los campesinos e indígenas en la vida nacional, vertebrar el territorio, ocupar las tierras orientales e incorporarlas a la actividad productiva. Con la Revolución Nacional se planteó, quizás por primera vez, una visión de país que incluía las mayorías de capas medias, obreros e indios y las regiones tropicales y amazónicas, superándose en buena medida la visión andinocentrista que hasta entonces había prevalecido en la política y la acción de gobierno. La Revolución Nacional, con el voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa, la marcha al oriente y otras medidas, abrió las puertas de la integración de los bolivianos y dio un formidable impulso a los procesos de movilidad social en una sociedad de estructuras rígidas y compartimentadas. La ideología del "nacionalismo revolucionario", convertida en doctrina oficial de la revolución del 52 conducida por el MNR, con su postulado de la alianza de clases (capas medias, obreros y campesinos) supuso un cambio sustancial en la manera de concebir la identidad boliviana, rechazando explícitamente los componentes raciales y relegando los componentes étnicos. La articulación discursiva de la antinomia "nacionalismo y coloniaje", "nación y antinación", fue el paradigma con el que se intentó absorber todas las identidades de clase, región, etnia

[11] Zabaleta, *Ibid*.

o cultura, dentro una categoría comprensiva y un sujeto colectivo unificador: el "pueblo". Es en esa nueva construcción discursiva e identitaria que el concepto de cultura boliviana fue adquiriendo cuerpo y significado concreto como producto de la convergencia y entrelazamiento de vertientes culturales distintas.

Desde luego, se puede discutir –en realidad se lo hace desde mucho tiempo atrás— si el propósito de prohijar desde el Estado el desarrollo de una cultura nacional ha sido un esfuerzo de producir un híbrido cultural a partir de una genuina fusión de la cultura española-europea (común a toda Iberoamérica) y de las culturas nativas de Los Andes o si, por el contrario, se trató nada más que de la asimilación de la población indígena a los patrones culturales occidentales. Pero aun en este segundo caso es innegable la influencia de las culturas indígenas en el modo en que la cultura europea ha sido implantada en tierras bolivianas, y en última instancia transformada. En cualquier caso, es indiscutible la naturaleza mestiza de la cultura boliviana, una condición, sin embargo, que no ha eliminado las culturas originarias ni ha homogeneizado al país en términos étnicos o culturales, aunque sí ha conseguido generar una matriz cultural común (de lengua, religión, costumbres, creencias y valores), facilitando los procesos de integración social y permitiendo que sus habitantes puedan reconocerse en una identidad nacional compartida.

Pero también es verdad que, con el súbito fin del proceso revolucionario del 52, la consolidación de la identidad boliviana fue perdiendo vitalidad y prominencia. Con la desintegración de la alianza de clases forjada por el MNR, sobrevino la irrupción de distintas identidades particulares (clasistas, sindicales, corporativas, regionales y otras), pero también -ya desde los años sesenta y setenta- el paulatino reflorecimiento de reivindicaciones e identidades étnicas que antes aparecían subsumidas en identidades de tipo económico ("campesinos", "agricultores", "sindicatos" "comunidades agrarias") y de índole político ("comandos", "milicias").

La conquista de la democracia en los años ochenta tuvo el mérito de galvanizar nuevamente la unidad de amplios sectores políticos, sociales y económicos. La lucha contra la dictadura militar tuvo un sentido cohesionador. El triunfo democrático desplegó un escenario que hizo nuevamente preeminente la identidad nacional frente a otras identidades subnacionales. La nación boliviana pareció emerger de la larga noche autoritaria con un sentimiento de unidad y, sobre todo, de esperanza en las posibilidades de levantar un sistema de gobierno que atendiera las demandas sociales y regionales acumuladas, asegurando un futuro de progreso con iguales derechos y oportunidades. Sin embargo, ese momento mágico se iría diluyendo rápidamente, bajo la presión de la crisis inflacionaria y

una aguda inestabilidad política, que acabó escindiendo e incluso enfrentando entre sí a las fuerzas sociales que se alinearon en la amplia coalición democrática.

Desde entonces y ante la debacle del nacionalismo revolucionario como ideología dominante, la tendencia que ha marcado la vida del país ha sido la fragmentación identitaria de los bolivianos. Curiosamente, las propias reformas políticas e institucionales del período democrático, en el afán de remozar las estructuras estatales y promover la inclusión social, contribuirían al auge de las identidades subnacionales y corporativistas. Me refiero al reconocimiento constitucional de Bolivia como país pluriétnico y multicultural, seguido del reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen, de las comunidades indígenas y campesinas como principales sujetos de la dotación de tierras; la educación bilingüe e intercultural establecida por la reforma educativa de 1994; la municipalización del territorio, el fortalecimiento de las autonomías municipales, la participación de las OTB en los gobiernos locales, el reconocimiento de distritos y municipios indígenas (acciones contenidas en la Ley de Participación Popular); así como la misma reforma parlamentaria que creó las diputaciones uninominales.

No hay duda de que éstas y otras medidas de reconocimiento de derechos colectivos y discriminación positiva a favor de sectores desfavorecidos, han dado un fuerte impulso a la afirmación de las identidades locales y la revalorización de identidades étnicas. Lo propio puede decirse del fomento de la participación política de la mujer y otras medidas que han promovido la conciencia e identidad de su género. En suma, el despliegue del proceso democrático hizo que Bolivia se redescubriera como una sociedad diversa y de múltiples identidades. La clase política fue sensible a esta nueva realidad. Los partidos políticos de ese tiempo produjeron las reformas en el sistema estatal, político y electoral para dar expresión institucional a la emergente y remozada sociedad boliviana. En contrapartida, esos cambios no lograron afirmar la identidad nacional como factor de cohesión de una sociedad heterogénea y con enormes fracturas internas. Es más, hubo efectos inesperados como el hecho de reforzar las identidades particulares, con lo cual los bolivianos han tendido a definirse más por su pertenencia a un determinado grupo o sector que por una nacionalidad compartida con el conjunto de los bolivianos; un contraste que se manifestado sobre todo en circunstancias de crisis social o política.

Embate contra la nación

La prominencia de la identidad boliviana, en comparación con otras identidades más limitadas, ha variado a lo largo de los años. La formación de la conciencia nacional boliviana

parece haber seguido un patrón que se parece más al de aquellas sociedades en las que los compromisos más intensos son con la familia, las comunidades locales y los grupos de gentes más próximas y semejantes y que, por lo mismo, tienen dificultades para desarrollar compromisos profundos y permanentes con el conjunto de la comunidad nacional. En ese sentido, Bolivia se diferencia de otros países que han conseguido, en el curso de largos períodos, consolidar una identidad de nación que inspira lealtades más fuertes y perdurables. Lo que no significa que el país no haya sido capaz de lograr momentos de unidad e identidad nacional por sobre sus contradicciones y diferencias internas (esto solo confirma que las identidades nacionales -como ocurre con cualquier otra clase de identidad- son construidas y reconstruidas, ensanchadas y achicadas, adoptadas o rechazadas). De cualquier manera, es evidente que Bolivia no ha podido consolidar una identidad nacional vigorosa, lo cual refleja la fragilidad de su construcción como nación y como Estado.

Con ese telón de fondo, ya se puede comprender mejor el fenómeno de desagregación y progresiva pérdida de referentes nacionales ocurrido en las últimas dos décadas. Ya se dijo que ello tiene raíces en el mismo proceso democrático, pero sus manifestaciones más destructivas son mayormente el resultado de un movimiento político y social que se dio a la tarea de cuestionar, impugnar y combatir la idea misma de Estado-Nación. Este movimiento cobró fuerza conforme ganaron protagonismo las organizaciones cocaleras y de campesinos -en torno a las cuales se fue reagrupando el sindicalismo boliviano-, grupos de izquierda reconvertidos al indigenismo, intelectuales seducidos por las teorías del multiculturalismo y la diversidad étnica -en boga en muchos sitios del mundo-, nuevas corrientes políticas de signo populista, movimientos sociales antisistémicos, ONG ligadas a estos movimientos, etcétera. El discurso y la acción de esos grupos no deja dudas: para ellos, Bolivia no es una nación de individuos que comparten una cultura, una historia y un ideario común sino, en todo caso, un conglomerado abigarrado de razas, etnias y culturas, lo que determina que las personas se definen más por su afiliación de grupo que por su pertenencia a una "abstracción" llamada Bolivia. Los intelectuales y representantes de estas corrientes han renegado y han arremetido contra los conceptos de "nación" y de "pueblo", que habían prevalecido en la época de la Revolución Nacional e, inclusive, en el período de lucha contra los gobiernos militares. Tales categorías ideológicas y políticas pasaron a ser vistas como expresiones del "colonialismo interno", correspondiendo en consecuencia liberarse de ellas para rescatar las identidades ancestrales pre-coloniales y convertir a los "pueblos indígenas" en los verdaderos sujetos históricos. De esta forma, se fue imponiendo una suerte de culto a la diversidad. Como resultado, la diversidad, más que la unidad o la

comunidad nacional, adquirió un valor preeminente para "refundar Bolivia",[12] con el efecto de socavar la identidad nacional y que su lugar pasara a ser ocupado por las identidades subnacionales, especialmente indígenas.

Pero este movimiento de desintegración de la identidad nacional no brotó en el vacío. En realidad, halló su caldo de cultivo en la desarticulación social y la fragmentación identitaria que se fue insinuando durante todo el transcurso del proceso democrático, de manera que la coalición anti-nación boliviana entroncó con ese proceso para potenciarlo y llevarlo a expresiones extremas. Cabe la pregunta de si éste era un desemboque inevitable del proceso democrático. La respuesta, por supuesto, es no. De hecho, los países vecinos, que también transitaron por experiencias simultáneas de democratización política, no siguieron el mismo camino que Bolivia.

¿Por qué este contraste? Una posible explicación es la siguiente. Bolivia es una sociedad sin tradición democrática en su historia. El régimen democrático liberal pluralista e inclusivo ha sido un proceso de la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI, y con una trayectoria intermitente de avances y retrocesos. En realidad, la práctica de la democracia se ha vivido más como un espacio de libertad política y sindical y no hay evidencias claras de que los bolivianos hubieran internalizado suficientemente los valores esenciales que hacen al sistema democrático: Estado de derecho, igualdad de derechos, respeto a la ley, responsabilidad individual, asunción del espacio público como ámbito del interés general, pluralismo político, tolerancia, respeto a las minorías. El consenso social respecto de estos valores luce todavía difuso. La cultura democrática no ha arraigado suficientemente en la conciencia individual y colectiva. Por lo mismo, la ideología democrática, que es producto de la cultura democrática, es también frágil.

El déficit mayor se advierte con respecto a los valores de ciudadanía; particularmente el sentido de responsabilidad ciudadana, como contrapartida necesaria de la adopción de derechos. La ciudadanía es el aspecto clave para que los pobladores de un país se sientan

[12] En un ensayo del año 2007, advertí del énfasis absoluto puesto en la caracterización de Bolivia como una sociedad nacional, étnica y culturalmente plural y diversa, al punto de postular la extravagante idea de que en la diversidad está el "motor del desarrollo" y la "base de la acumulación interna y la calidad de vida", como decía el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del MAS (2007). Allí mismo observé el riesgo de caer en la idolatría de la diversidad, al creer que el mejor de los mundos posibles es un mundo diversificado en una diversificación creciente que hace de la sociedad una realidad siempre segmentada y desmembrada; además del peligro que comportaba hacer del "multiculturalismo" un proyecto político e ideológico, en la medida en que atizaba las diferencias étnicas y tendía a mantenerlas aisladas y compartimentadas, todo lo cual devenía en un lastre para la integración nacional y la formación de una comunidad de ciudadanos —que es la esencia de la nación moderna— como sujetos con iguales derechos y obligaciones. Véase *Buscando el Porvenir en el Pasado: radiografía de la ideología del gobierno*, ureKa ediciones, La Paz, 2007.

parte de una comunidad nacional, de una nación. La ciudadanía es el elemento nivelador de las diferencias porque, no importa cuáles sean las diferencias de estatus económico, social, cultural, ideológico, de raza, etnia o género, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. La ciudadanía da significado al Estado de derecho, y éste es el que crea las condiciones para que aquella sea posible. Pero si los individuos, grupos o sectores de la sociedad no se perciben ciudadanos o no entienden esa dimensión del "ser" ciudadano, es obvio que la identidad nacional y el sentido de nación estarán ausentes o serán precarios. En la experiencia boliviana hay muchos indicios de que el desarrollo democrático no fue acompañado del fortalecimiento de la cultura ciudadana, y sobre todo de la noción de responsabilidad ciudadana, que tiene un sentido eminentemente individual.

Por tanto, en un escenario de cultura ciudadana débil no es extraño que la evolución del sistema democrático fuera perdiendo sustancia y que en su lugar prosperasen prácticas como el caudillismo, el faccionalismo, el clientelismo y el patriomonialismo estatal, todas ellas muy arraigadas en la cultura política y en la idiosincrasia nacional y con efectos de erosión de la cultura cívica, el capital social, el espíritu patriótico y el sentido de comunidad nacional. Por último, si se considera la incidencia de discursos y prácticas que han fomentado el carácter faccionalista y corporativo de la acción social, redefiniendo las contradicciones internas en términos de conflictos étnicos, culturales y hasta raciales, no es casual que las tendencias centrífugas y disociadoras acabaran desvaneciendo los conceptos de identidad e interés general.

Lo dramático es que debido al colapso de los partidos que, en su día, fueron actores centrales del sistema político (MNR, ADN, MIR y otros), la democracia institucional se vio desprovista de capacidad efectiva para contrarrestar ese despliegue inusitado de tendencias a la segmentación social y la fragmentación identitaria. De pronto, Bolivia se quedó sin partidos nacionales —en el sentido de presencia territorial y sobre todo de visión nacional—, que sacaran cara y tomaran la defensa de los intereses nacionales, por sobre los intereses de parcialidades territoriales, sectoriales o corporativas. En última instancia, esos mismos partidos -en parte por sus propias falencias y responsabilidades- fueron víctimas de la fragmentación sobreviniente en Bolivia.

De este modo, en Bolivia fue ganando fuerza como un fenómeno trascendente el resurgimiento de las identidades subnacionales y la pérdida de importancia relativa de la identidad nacional boliviana, y cuya gravitación está en el centro mismo de la crisis política y estatal actual, por todos sus efectos de desintegración de las estructuras nacionales y porque además potencia la acción de múltiples fuerzas centrífugas: etnicistas, localistas y regionalistas, vaciando de contenido la existencia del Estado Nacional. Qué duda cabe, los

frutos más expresivos de estas tendencias desintegradoras de la identidad nacional boliviana son la Constitución de 2009, patrocinada por el MAS en su intento obsesivo de "refundar Bolivia", y el Estado Plurinacional concebido bajo su amparo como un nuevo modelo estatal y de organización política.

Al respecto, hay que decir que la nueva Constitución no condice con los principios de igualdad ciudadana. Con el argumento de superar viejas discriminaciones y exclusiones sociales, lo que hace es constitucionalizar derechos desiguales y discriminatorios (exactamente lo contrario de la democracia constitucional). Este es el significado real del "Estado Plurinacional Comunitario", que se postula como modelo de Estado, y que asume que Bolivia es una sociedad no sólo pluriétnica y multicultural -como decía la Constitución anterior-, sino plurinacional, conformada por varias "naciones". Por tanto, ya no se trata solamente de diversidades étnicas y culturales sino de diferencias nacionales. De hecho, el texto constitucional reconoce como "naciones" a los "pueblos indígena originario campesinos", debido a su "existencia precolonial".[13] Lo insólito de esta noción de "plurinacionalidad" es que la misma no se limita a reconocer la existencia de múltiples "naciones" en la sociedad boliviana, sino que el Estado mismo es definido como "plurinacional", es decir constituido con base en la diversidad nacional, étnica, cultural. Por cierto, esta forma de concebir la "plurinacionalidad" y su expresión estatal contrasta radicalmente con el concepto de nación democrática, que se ha impuesto en el mundo contemporáneo.[14] Y es ahí, justamente, donde reside el germen de un sistema segregador y divisivo. O sea, el fundamento del Estado definido como plurinacional no es lo que une a los bolivianos, lo que les es común, sino lo que los diferencia y distingue como identidades particulares. Esta concepción de un país que se organiza a partir de su diversidad es una perspectiva transversal a todo el texto constitucional y, en realidad, la piedra angular de toda la organización del nuevo Estado.

---

[13] Cabe entender que estas naciones serían treinta y seis, por el número de idiomas nativos reconocidos expresamente como oficiales en el proyecto constitucional, aunque se sabe que algunas de estas "naciones" apenas llegan a cientos de habitantes o, incluso, que podrían ser ya inexistentes, como lo mostró el Censo de 2012 Sin embargo, dada la laxitud de esa definición, no habría ninguna razón para impedir que otros grupos étnicos, no mencionados expresamente en el texto, eventualmente pudieran reclamar su reconocimiento como tales.

[14] Jorge Lazarte lo dejó muy claro: *«La nación moderna, como comunidad de pertenencia, viene de los siglos XVIII XIX; es supra-étnica y producto de la necesidad política e histórica de construir lo "común" que supere la fragmentación medieval; y por ello mismo, es nacional y territorial. En tiempos de democracia, la "nación" adquiere una nueva connotación, pues ya no puede concebirse sino como "nación democrática", como comunidad de ciudadanos, que ya no es la uniformizadora del siglo XIX»*. Cf. LAZARTE, J.: "Reforma Constitucional: por qué, qué y cómo. Ideas para abrir el debate". En OPORTO, H. (ed.): *Bolivia, encrucijadas en el siglo XXI. Visiones e ideas para una agenda de país*. Plural editores, La Paz, 2014, p.130.

Pero no se trata únicamente de un modelo estatal basado en la presunción de la existencia de varias "naciones"; también es una forma de consagrar jerarquías entre los grupos nacionales.[15] De hecho, en la nueva Constitución las "naciones" indígenas -por su condición étnica y "originaria"- adquieren una categoría privilegiada, como el derecho de libre autodeterminación, la autonomía territorial, el aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, un sistema judicial propio, circunscripciones especiales, cuotas de participación en los órganos y entidades del Estado y otras prerrogativas exclusivas.[16] Lo que resulta incuestionable es que el Estado Plurinacional de la nueva Constitución presupone la desigualdad.[17]

Tal parece que, en el afán de reparar las injusticias centenarias sufridas por los pueblos indígenas, a los ideólogos de la Constituyente de 2009 no se les ocurrió mejor idea que reproducir la segregación heredada de la Colonia, pero esta vez a la inversa, consagrando un sistema de poder con predominio indígena. Según Lazarte, esto sólo es comprensible si se entiende la dialéctica maniquea de "victimas" *versus* "victimarios", que impregna todo el proyecto constitucional del MAS, y en el que el "victimismo" encaja muy bien en la idea de un "juicio histórico" y un "resarcimiento a las víctimas".[18] Lo importante de subrayar es que la Constitución rompe el principio de la igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos, que es el fundamento del Estado democrático de derecho. Y no sólo eso: la caracterización de Bolivia como Estado plurinacional, fundado en el pluralismo político y jurídico, significa relegar y diluir el concepto de ciudadanía. Así como la definición del "modelo de Estado" conlleva que la nación boliviana desaparece, el criterio de otorgar estatus privilegiado a favor de los pueblos indígenas -en cuanto quebranta el principio de igualdad política y jurídica-, implica romper la unidad del Estado y, por ende, diluir la noción de República.

---

[15] En este aspecto se puede reconocer la herencia de la sociedad colonial jerárquica, en la que los grupos sociales tenían derechos diferentes: los españoles, los criollos, los mestizos y los indios. El derecho dependía del color o del lugar en la jerarquía social.

[16] Véase OPORTO, H.: *El cielo por asalto. Cinco ensayos breves sobre política boliviana*. Capítulo II: "La autocracia electa". Plural editores, La Paz, 2009.

[17] A propósito del debate en España sobre "Estado constitucional" y "Estado plurinacional", el constitucionalista Javier Tajadura Tejada, hace una precisión conceptual: *«La nación política no es solo la nación soberana, sino sobre todo la "nación cívica", es decir, compuesta por ciudadanos libres e iguales en derechos. Esa nación cívica —el presupuesto del Estado constitucional— es incompatible con cualquier definición del Estado como plurinacional. El Estado constitucional está integrado por ciudadanos (iguales) y no por naciones (diversas). No es la soberanía, sino la libertad y la igualdad lo que está en juego»*. Véase, Javier Tajadura Tejada: "¿Federal o plurinacional?", *El País*, Tribuna, 08/08/2017.

[18] LAZARTE, J.: *Ibid.,* p.143.

Un claro ejemplo de ello es la división de la función jurisdiccional en *ordinaria* e *indígena*; iguales en jerarquía, con lo cual se instituyen *dos sistemas de justicia*: uno para el mundo indígena y rural, y otro para el mundo urbano y sus habitantes.[19] Una dualidad judicial así es algo muy diferente de un modelo de justicia que recupera e integra prácticas tradicionales de resolución de conflictos y de sanciones comunales, en el marco de una justicia única, inspirada en valores universales que resguardan los derechos e intereses de todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, étnica o de género. La pregunta es cómo podrán coexistir esos dos sistemas sin entrar en colisión. ¿Cómo se protegerán los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos?[20]

Transcurrida casi década y media de la vigencia de la CPE promovida por el MAS, contamos ya con evidencia suficiente para saber que la razón última del cambio total de la Constitución tuvo que ver menos con el propósito de adecuar el texto constitucional con la realidad nacional que con la implantación de un régimen autocrático y corporativo. La misma idea del Estado plurinacional ha servido, ante todo, como coartada ideológica para desmantelar las instituciones republicanas y para propiciar la captura corporativista de las estructuras estatales y, con ello, reforzar las prácticas patrimonialistas, el nepotismo, la corrupción, el clientelismo en gran escala, que son los verdaderos cimientos sobre los cuales descansa el funcionamiento del régimen populista.

Pero ni siquiera así ha sido posible resolver la falta de efectividad y continuidad del orden constitucional. Si, por algún tiempo, la Constitución de 2009 fue el gran emblema del llamado "proceso de cambio", erigiéndose en la referencia suprema del nuevo orden político, muy pronto el mismo régimen se vio en la disyuntiva de respetar "su propia" legalidad, o bien transgredirla, que es finalmente lo que hizo, no una sino muchas veces, y con lo cual quedó patentizado que, en realidad, la Constitución no vale nada; que puede revolverse como un calcetín, tantas veces como le sea necesario al capricho e interés del gobernante de turno. De hecho, es lo que sucedió con la ilegal habilitación de Evo Morales

[19] Para Lazarte (*Ibid*.: p.161), ello supone "trastrocar el ordenamiento jurídico de un Estado que, por ser tal, no puede funcionar con justicias paralelas; puesto que la justicia indígena ha sido habilitada para ser ejercida territorialmente (Art. 191.II): esto equivale a promover la fragmentación medieval de la justicia, dado además que sus valores y reglas pueden contradecir la salvaguarda de los derechos humanos, como de hecho ocurre dentro de la llamada justicia comunitaria."

[20] Esta pregunta vale especialmente para la jurisdicción indígena, habida cuenta que no existe propiamente lo que podría llamarse un "derecho indígena", que las comunidades rurales carecen de normas estables y escritas, que sus "usos y costumbres" suelen ser discrecionales y arbitrarios y que no precautelan los derechos individuales ni resguardan el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia o la obligación de la carga de la prueba en la parte acusadora. Conocido es que a nombre de la "justicia comunitaria" se cometen muchas veces delitos extremos y atropellos flagrantes a los derechos humanos.

para dos reelecciones consecutivas -expresamente prohibidas por la CPE-, y luego de forma indefinida, según la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2019, en un claro afán prorroguista y de perpetuación en el poder.

Así pues, la crisis de identidad nacional fue gatillada por un movimiento político anti-sistémico que se dio a la tarea de manipular las identidades indígenas y las demandas de dignidad y reconocimiento de sectores empobrecidos y postergados, para construir un régimen de inequívocos rasgos autoritarios y centralización del poder, desplegando con destreza una estrategia divisiva y polarizadora. La situación se complejiza mucho más por la disgregación del sistema de poder en formaciones políticas fragmentadas, micropoderes territoriales, organizaciones sindicales y muchos otros grupos de presión. Y todo ello, en un contexto donde la identidad común de los bolivianos se ha visto erosionada por los ataques de sectores que cuestionan la validez y legitimidad de la nación boliviana. El resultado es que la identidad nacional es cada vez menos una fuerza galvanizadora de la sociedad, capaz de contener las tendencias centrífugas y polarizadoras que socavan la convivencia democrática y la viabilidad del desarrollo nacional.

¿Por qué importa la identidad nacional?

La debilidad de la identidad nacional puede llegar a ser un problema grave y un obstáculo mayor para el desarrollo. Esto es la conclusión a la que llega Fukuyama,[21] observando varios ejemplos de países que se han convertido en Estados fallidos y sufren el caos y la violencia, como también otros casos de países en desarrollo que han logrado mantener cierta estabilidad, pero continúan asediados por divisiones étnicas y religiosas y un sentido frágil de identidad nacional. El resultado sería un alto nivel de pobreza, corrupción y crecimiento económico incipiente. El contraste a esa situación es la experiencia de países como Japón, Corea y China, que ya disponían de identidades nacionales bien definidas mucho antes de que comenzaran a modernizarse. Parte de la razón de por qué estos países han sido capaces de crecer de forma espectacular en el siglo XX y a principios del siglo XXI -explicó Fukuyama- es que no tuvieron que resolver cuestiones internas de identidad en el momento en que se abrieron al comercio y la inversión internacional. Y si bien padecieron episodios de guerra civil, división y ocupación extranjera de sus territorios, también fueron capaces de

[21] FUKUYAMA, F.: *Ibid*., capítulo 12.

encontrar fundamentos en sus tradiciones estatales y en un objetivo nacional común para superar tales conflictos y estabilizarse.

Este argumento en favor de la ventaja que comporta poseer una identidad nacional definida y fuerte no significa desconocer o rechazar el valor de la diversidad cultural, étnica, religiosa, regional o de otra naturaleza. Por varias razones esta diversidad es positiva para las sociedades. Esto es algo que también ha señalado Fukuyama: *«La exposición a diferentes formas de pensar y actuar estimula la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor»*.[22] Sin embargo, la diversidad no es un bien incuestionable, y no debe ser objeto de una creencia dogmática en su valor *per se*. Nuevamente, hay muchos ejemplos de países heterogéneos en su composición demográfica y étnica, y en los cuales el resultado de esa diversidad ha sido el estallido de conflictos fundamentales en el seno de una nación relacionados con la definición misma de su identidad, como ocurrió en Estados Unidos en 1861, en Alemania en 1933, en España en 1936 o en Egipto en 2011. Por el contrario, India, Canadá y los mismos Estados Unidos, entre otros, son ejemplos de países que, en medio de su diversidad, pudieron construir identidades nacionales alrededor de valores políticos liberales y democráticos y de las experiencias comunes que proporciona un tejido social intercultural.

La identidad nacional es fundamental para la estabilidad y la funcionalidad del orden político, por varias razones que Fukuyama ha remarcado:[23]

- *La Identidad Nacional genera un radio amplio de confianza*. La confianza es como un lubricante que facilita el intercambio económico, la colaboración social, la participación política y cívica. Es decir, ayuda a construir *capital social*, una las fuentes reconocidas del progreso de las naciones. Esto es tanto más importante para una sociedad, como la boliviana, con bajos niveles de confianza interpersonal. De hecho, una de las barreras al desarrollo de sistemas y redes de protección social amplios y eficientes, es un compromiso escaso de sectores de la sociedad con los programas sociales de ayuda a los más necesitados, lo cual puede explicarse, al menos en parte, por los débiles lazos de solidaridad en la sociedad.
- *La Identidad Nacional facilita el desarrollo económico*. Si los ciudadanos no se enorgullecen de su país, no se esforzarán en su provecho. En cambio, cuando prevalecen los grupos identitarios (basados en la etnia, la región, el grupo corporativo

[22] *Ibíd.,* p.141.

[23] *Ibíd.*

o la religión), ellos tienden a crear economías cerradas; prefieren hacer negocios entre sí o bien buscan obtener beneficios exclusivos para su propio grupo, lo que impide que se desarrollen mercados más grandes, abiertos y dinámicos.

- *La Identidad Nacional tiene un papel crucial para hacer posible la democracia*. Para que la democracia funcione, el contrato social tiene que ser visto como legítimo porque expresa un acuerdo o una idea compartida de la naturaleza del sistema político. Si los ciudadanos, o una parte relevante de la sociedad, no cree que forme parte de este contrato, o cuestiona las reglas de juego, el régimen de gobierno verá disminuida su capacidad de gobierno, y entrará en crisis.
- *La Identidad Nacional promueve el buen gobierno*. La calidad del gobierno depende en mucho de funcionarios que pongan el interés público por encima de sus propios intereses, o de los intereses de grupos corporativos o de identidad particular.

La importancia de la identidad nacional es también muy valorada por el historiador israelí Yuval Noah Harari, para quién la magia de la identidad nacional hace que los habitantes de una nación podamos sentirnos cercanos, que podamos ser solidarios con personas a las que ni siquiera conocemos pero cuya situación y bienestar nos importa por ser connacionales; que incluso estemos dispuestos a pagar impuestos para financiar al Estado y sus programas sociales, que aceptemos renunciar a ciertos intereses particulares y a una parte de nuestros derechos en aras del interés general y el bien común. Con esta perspectiva, Harari ha observado, por ejemplo, que la gente únicamente se siente comprometida con las elecciones democráticas cuando comparte un vínculo básico con la mayoría de los demás votantes.

> *«Si la experiencia de otros votantes me es ajena, y creo que no entienden mis sentimientos y no les importan mis intereses vitales, no tendré en absoluto ninguna razón para aceptar el veredicto si pierdo la votación, aunque sea por cien votos a uno. Por lo general las elecciones democráticas solo funcionan en el seno de poblaciones que ya comparten algún vínculo, como creencias religiosas y mitos nacionales comunes. Son un método para zanjar desacuerdos entre personas que ya están de acuerdo sobre cosas básicas».*[24]

Estos son buenos argumentos para sostener que la democracia difícilmente funciona cuando no se sostiene en un fuerte sentido de nación e identidad nacional. Y esto es lógico: si uno no se siente integrado y que pertenece a una misma comunidad nacional (y no sólo

[24] HARARI, Y.N.: *Homo Deus. Breve historia del mañana*. Debate, México, 2021, p.279.

a una región, grupo étnico, clase o cultura) y si, además, no siente que tiene un futuro compartido con otros conciudadanos, incluso con gentes con las que no simpatiza o no comparte creencias, no hay razón para aceptar las reglas de la democracia. En este tipo de ambiente social -y ha sido también la experiencia de Bolivia-, realizar elecciones democráticas no es una panacea, porque los partidos enfrentados se cuestionan si deben o no respetar los resultados de las urnas.

Huntington, por su parte, ha relievado el nexo entre el interés y la identidad nacionales.[25] Este autor define el interés nacional como un bien público que atañe a todos o a la mayoría de los ciudadanos de un país. En su opinión, los intereses nacionales suelen combinar preocupaciones materiales y de seguridad, por un lado, y preocupaciones morales y éticas, por otro. Añade que un interés nacional vital es aquel que las personas *«estarían dispuestas a defender con su sangre y su dinero»*.[26] Por tanto, saber identificar cuáles son los intereses nacionales, y en qué medida hay o no coincidencia entre las preocupaciones materiales (de seguridad, comercio, bienestar, etc.) y los valores de la sociedad, es algo esencial para definir los objetivos nacionales, en uno u otro momento de la historia. Pero la capacidad de identificar los intereses nacionales, y especialmente los intereses vitales de un país, no es una cuestión meramente política o económica. Tiene también que ver con el grado de desarrollo de la identidad nacional: una sociedad con una identidad nacional frágil y amenazada por el empuje de las identidades subnacionales o particulares, tendrá, naturalmente, más dificultades para identificar cuáles son sus intereses nacionales, lo que se traducirá en políticas de gobierno volátiles, inestables y carentes de legitimidad. Contrariamente, la fortaleza relativa de la identidad nacional beneficia la posibilidad de definir más certeramente los intereses y objetivos nacionales y de contar con un apoyo popular amplio.

Aquí reside una de las razones prácticas de la importancia de prestar atención a la cuestión de la identidad nacional. Mi propia postura es que Bolivia adolece de un problema crónico, que es su débil identidad nacional; debilidad que parece haberse acentuado en el último tiempo por el embate de varios movimientos sociales con identidades más limitadas y cerradas (como son las identidades étnicas, culturales, corporativas, etc.), en medio del auge de las ideologías del multiculturalismo. De hecho, el Estado boliviano ha sido objeto de captura por intereses corporativos diversos, principalmente sindicales, cocaleros, campesinos, gremialistas, cooperativistas mineros y otros, sectores estos que componen la

[25] HUNTINGTON, S.P.: *Op. cit.*

[26] *Ibid.,* p.186.

base de sustentación del régimen y tienen el poder de incidir en las decisiones de gobierno e, incluso, dictaminar la orientación de las políticas públicas, arropadas por un discurso populista que ha proclamado al gobierno del MAS como "el gobierno de los movimientos sociales". Así, de la mano de *corporativización del Estado*, ha sobrevenido la *desnacionalización de las políticas gubernamentales*, muchas de las cuales no constituyen en rigor un bien público, en el sentido de que no expresan un interés general, sino, más bien, una serie de intereses sectarios, nepotistas o clientelistas. Dicho de otro modo: son los grupos empoderados -a menudo minoritarios- los que, prevalidos de su militancia en el "proceso de cambio" y su capacidad de presión mediante el uso de la fuerza en los conflictos, han conseguido poner al aparato estatal al servicio de sus intereses particulares. En contrapartida, el Estado y la administración de gobierno han perdido la noción de interés nacional y de bien público en la definición de las prioridades de gobierno y en la forma cómo se asignan y se ejecutan los recursos fiscales. Y tanto más por el hecho de que, en ausencia de Estado de derecho, no existen contrapesos institucionales ni espacios de deliberación democrática que puedan evitar la toma de decisiones discrecionales y verticalistas.

El resultado no es solo un deterioro de la capacidad del Estado (lo cual depende mucho de funcionarios idóneos y comprometidos con el interés general), sino un extravío de los fines legítimos de las acciones de gobierno. En definitiva, la carencia de una identidad nacional consistente suele ser un lastre para la construcción de políticas públicas que encarnen o estén en sintonía con los intereses nacionales, tanto el ámbito interno como en la política exterior. Evidentemente, hoy en día la sociedad boliviana parece menos preparada para identificar con claridad sus intereses generales vitales, eso que los bolivianos "estarían dispuestos a defender con su sangre y su dinero".[27] Para revertir la desnacionalización de las políticas y los actos de gobierno haría falta que la sociedad asumiera conciencia del problema y se comprometiera con unos intereses nacionales renovados, lo cuales tendrían

[27] Durante mucho tiempo se ha creído que la única cuestión que puede unir a los bolivianos es la causa marítima. Para los gobernantes de turno el manejo de la cuestión marítima y las relaciones con Chile han sido siempre un tema delicado, a sabiendas de que una gestión exitosa podría redituarles políticamente o, en caso contrario, hundirlos en la impopularidad. Pero tal vez esto puede estar cambiando. Curiosamente, los dos estrepitosos fracasos del gobierno del MAS en la Corte Internacional de Justicia (donde, en un caso, por una impulsiva iniciativa boliviana, y en el otro, por iniciativa chilena, Bolivia tuvo que someterse a los fallos de la CIJ de La Haya, cosechando sendas derrotas judiciales y diplomáticas respecto del reclamo de una salida soberana al mar y de la defensa de la soberanía boliviana sobre las aguas del río Silala, respectivamente), prácticamente no tuvieron consecuencias políticas. Por alguna razón enigmática, el pueblo boliviano pasó por alto estos dos reveses, y tanto Evo como Luis Arce, salieron prácticamente ilesos. ¿Significa esto que la reivindicación marítima ha dejado de ser un tema de primera importancia en las preocupaciones de los bolivianos?

que tomar prioridad por encima los intereses sectoriales, regionales u otros de índole similar que, aunque legítimos, deberían quedar subordinados a aquellos.

Política exterior errática

Precisamente, son esas dificultades para desarrollar unas políticas nacionales legítimas y eficaces, lo que también puede explicar las carencias del Estado boliviano en el plano de la política exterior y de las relaciones internacionales. Al respecto, el balance que hace Gonzalo Mendieta de la trayectoria de la diplomacia boliviana, a propósito del Bicentenario de Bolivia, atribuye falta de realismo y exceso de idealismo a los gestores de la política exterior, lo cual estaría a la base de muchos de los traspiés y frustraciones del país en su relacionamiento con otros gobiernos y particularmente de su entorno regional[28]. Esto puede ser cierto, y por ello la tesis de Mendieta tiene mérito. Sin embargo, detrás de tales fracasos quizá esté sobre todo el reducido espacio para la construcción de una verdadera política exterior, que refleje y encarne los intereses permanentes y estratégicos de Bolivia. Esto tiene mucho que ver con la dificultad de lograr acuerdos y consensos amplios en cuestiones prominentes de política exterior y diplomacia nacional.

Un ejemplo sobresaliente, que sirve para ilustrar lo antedicho, es el fallido intento de exportación del gas boliviano a Norteamérica, a través del proyecto Pacífic LNG, trabajado en las postrimerías del gobierno de Jorge Quiroga (2001-2002), y continuado luego por Sánchez de Lozada en su segunda presidencia (2002-2003). La idea de exportar gas natural líquido (LNG) desde territorio boliviano -el primer proyecto de este género en Sudamérica-, fue un resultado lógico del crecimiento explosivo de las reservas de gas natural en Bolivia (32.2 TCF certificados el año 2000), que hacía posible cubrir ya no solo las necesidades energéticas de países vecinos, sino poder llegar a los mercados de ultramar de gas natural en la costa oeste de Estados Unidos y también en el mercado de México[29]. De hecho, el proyecto promovido por un consorcio (Pacífic LNG) de las empresas ya instaladas en Bolivia (Repsol, BG y BP), en asociación con SEMPRAS -un distribuidor de gas natural en el sur de California-, planeaba exportar dos trenes con una capacidad inicial de 24.9 MMCD, desde

[28] Gonzalo Mendieta: "Adiós al integrismo diplomático", en Brújula Digital, Especial Bicentenario, 18/09/2025.

[29] Carlos Miranda escribe, al respecto: "La exportación de gas convertido en LNG fue el proyecto más ambicioso que se propuso para lograr mayores mercados, comercializar las reservas existentes y mantener una actividad exploratoria igual o mayor que la anterior", pág. 144. Véase su trabajo: "Los hidrocarburos en el contexto regional, con la capitalización y después con la nacionalización", en *El péndulo del gas. Estudios comparativos de la política de hidrocarburos*. Fernando Candia/Napoleón Pacheco (editores). Fundación Milenio, 2009

una planta de licuefacción a construirse en el puerto de Patillos, en Antofagasta, Chile, a 750 km del yacimiento de Margarita, en Tarija. La inversión total estimada para el proyecto era de US$ 5.000 millones. En diciembre de 2001, llegó a suscribirse un memorando de entendimiento entre Pacífic LNG y Sempra, que concedía la exclusividad de venta y regasificación de más o menos 30 MMCD de LNG en Baja California, con destino a la generación termoeléctrica y el uso industrial en la zona fronteriza de California y México[30]. El gobierno de Quiroga había iniciado negociaciones reservadas con su similar de Chile, a fin de obtener la concesión de una Zona Económica Especial, por 99 años, de uso industrial, comercial y de servicios y donde se habilitaría un puerto contiguo y exclusivo (Patillos), con un régimen de libre tránsito y la aplicación de la legislación boliviana en materia laboral, administrativa, tributaria e hidrocarburífera[31]. Las conversaciones con el gobierno chileno de Ricardo Lagos parecieron bien encaminadas y con posibilidades ciertas de concluir en un acuerdo. Chile se beneficiaría por doble partida: del gas boliviano para su consumo interno, y del impacto económico de un negocio de alcance continental en su propia costa. De paso, habría dado un paso fundamental para resolver su diferendo histórico con Bolivia.

No obstante, el proyecto LNG no hizo sino despertar una encendida reacción nacionalista y antichilena, dando paso a una campaña de descalificación y rechazo; cuestionándose el hecho que se pretendiera exportar el gas en lugar de industrializarlo, que un consorcio transnacional fuera el gestor del proyecto y, por supuesto, la idea de sacar el gas a través de un puerto chileno (el "enemigo histórico"). Entonces, una coalición de intereses tomó fuerza en el rechazo al proyecto: sindicalistas, izquierdistas radicales, demagogos de toda laya, los infaltables grupos nacionalistas, y un factor regional poderoso, como fue la agitación de autoridades locales y dirigentes sociales de la ciudad de El Alto, que exigió que la exportación fuese por un puerto peruano y no chileno, con el argumento que el tendido de los ductos desde Tarija hasta la frontera peruana iría a favorecer a los departamentos altiplánicos del país.

A esa coalición de intereses se sumaría una inusual acción desplegada por el gobierno del Perú y su representación diplomática en Bolivia, en contra del proyecto Pacífic LNG. Perú

---

[30] Carlos Alberto López: *Del gas y sus digresiones*, Fundación Milenio, Boletín económico, Análisis de Coyuntura, N° 7, diciembre de 2007

[31] Para el canciller de la época, Gustavo Fernández, la instalación de la Zona Económica Especial para la exportación del LNG boliviano representaba la posibilidad no únicamente de un negocio de gran magnitud que iría a proyectar a Bolivia como un exportador de gas más allá de la región, sino también la oportunidad histórica de lograr una efectiva posesión en un territorio que antes fue boliviano con un enclave económico administrado por el Estado, y de esta forma recuperar la cualidad marítima y la gravitación sobre el Pacífico, en el camino de la ansiada reintegración marítima. Véase, Gustavo Fernández: "El arte de lo posible". La Razón, 30/01/2003

entendió que este proyecto rivalizaba con su propio interés de exportar al mercado californiano el gas procedente de Camisea, y cuando el proyecto boliviano se hallaba mucho más adelantado y con la ventaja de contar con reservas en cuantía muy superior a las reservas peruanas. Esto mismo mostró la dificultad de los políticos bolivianos de lidiar con los intereses de los vecinos y de lograr prevalecer en la defensa de los intereses propios, sin sucumbir a las presiones externas, que muchas veces encuentran un caldo de cultivo en las divisiones y luchas internas del país.

Lo evidente es que el gobierno de Quiroga no pudo sortear la oposición al proyecto LNG, debilitado por la culminación de su mandato. Sánchez de Lozada, sucediendo a Quiroga en la presidencia, en agosto de 2002, retomaría el proceso de negociación con Chile, consiguiendo que su par chileno Ricardo Lagos aceptara abrir conversaciones con respecto a un posible puerto marítimo en el norte chileno bajo posesión boliviana, adicionalmente al puerto de Patillos y a la Zona Económica Especial en ese lugar. Pero esto sirvió de poco: las tratativas de los gobiernos de Bolivia y Chile, a pesar de sus promisorias perspectivas, se frustraron con el estallido de la "guerra del gas" y la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003. Y con ello también las perspectivas de un proyecto trilateral de desarrollo de la región conformada por el altiplano boliviano, el norte chileno y el sur peruano, que era otro componente conspicuo de la negociación entre los gobiernos boliviano-chileno de la época.

Lo que hay que subrayar es que la crisis política de 2003 hizo evidente que el rechazo a la idea de exportar gas por Chile era un sentimiento poderoso para aglutinar todas aquellas otras visiones y demandas con antecedentes en la memoria larga de los bolivianos[32]. El éxito político de los líderes de la revuelta de octubre consistió en hacer de ese rechazo el catalizador de la protesta social. La "guerra del gas" despertó al león dormido de la nacionalización: esa sería su consecuencia más trascendente. En un país con una historia de sucesivas nacionalizaciones, la "nacionalización de los hidrocarburos", dispuesta tres años después por el gobierno de Evo Morales, ha confirmado el potencial de esta medida, unas

[32] Para Bruno Boccara, la llamada guerra del gas ofrece una muestra significativa del funcionamiento de la psicología colectiva boliviana. Argumenta que "la crisis en que se sumergió Bolivia también era una manifestación de conflictos psicologías profundos". En ese sentido, dice también que los acontecimientos de octubre de 2003 son una poderosa ilustración del impacto que los mecanismos de defensa social pueden tener en las perspectivas económicas de una nación. Bocara define las "defensas sociales", como "la respuesta inconsciente de los grupos sociales ante las inquietudes o ansiedades", y que "afecta la cultura y la forma de funcionamiento de una sociedad". Véase, Bruno Bocara: *Bolivia: revirtiendo traumas*, Biblioteca CERES-Plural editores, 2013, pág. 16-17

veces para derribar gobiernos, otras para afincarse en el poder. He ahí su significado en la historia política boliviana.

Un nuevo contrato social

El tránsito de la dictadura militar a la democracia, cuatro décadas atrás, comportó un contrato social implícito entre los bolivianos, que posibilitó la instauración de un sistema de gobierno democrático representativo. Ese contrato se dio por medio de acuerdos de los partidos políticos y actores sociales para la estabilidad económica, la democratización del poder político, la descentralización territorial, la expansión de los servicios de educación, salud y pensiones, el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y la promoción de los derechos indígenas y colectivos. Sobre tales bases, el régimen democrático pudo funcionar razonablemente bien por casi dos décadas, con estabilidad y gobernabilidad.

Desgraciadamente, en el transcurso de los años el contrato social que sostuvo la transición y la democracia pactada se fue erosionando y perdiendo significado, hasta que, con la crisis política de 2003, se hizo añicos. Después, ya con el MAS en el poder, la Asamblea Constituyente (2006-2008) falló en reformular el contrato social -si es que realmente tuvo ese propósito, como se dijo- y en levantar un sistema político más inclusivo de la diversidad étnica, cultural y regional. En lugar de ello, el nuevo régimen populista eligió el camino de la confrontación polarizadora y, con ello, de la "refundación de Bolivia", cristalizada en el Estado plurinacional y comunitario que, en realidad, fue una manera de desconocer la República y negar la idea de la nación boliviana. El resultado no ha sido más democracia, sino lo contrario: menos democracia, menos pluralismo, menos tolerancia y, ¿cómo no?, una sociedad partida y desgarrada. Quién sabe si era esto justamente lo que el proyecto del MAS buscaba para implantar un poder autocrático corporativo, bajo la bandera de la plurinacionalidad y la descolonización.

Ahora bien, este modelo de gobernabilidad autoritaria está quebrado. La hegemonía ideológica y el poder total anhelados por el MAS, implosionaron. A su pesar, una nueva transición política está en curso, aunque con un horizonte difuso y en un clima de marcada incertidumbre. A la polarización, que ha definido el tono de las luchas políticas recientes, se superpone un proceso de fragmentación política. Y a la polarización y la fragmentación les subyace una crisis de identidad nacional que complica la instalación de un marco de convivencia democrática, con cohesión social y estabilidad duradera. La crisis de identidad nacional pone de manifiesto la actualidad de la cuestión nacional en una sociedad que ha venido avanzando, aunque a tropezones, en procesos de inclusión y movilidad social y de

modernización económica -ciertamente desigual-, pero sin resolver cuestiones propias de la construcción nacional, como la afirmación de un sentido de nación e identidad nacional, así como de un Estado sólido y eficaz que provea orden, legalidad, seguridad, gobierno efectivo, educación y salud de calidad, una red de protección social.

Otra faceta de la cuestión nacional es la brecha de desarrollo que se ha abierto entre el departamento de Santa Cruz y las otras regiones del país; una cuestión compleja y potencialmente peligrosa para la integridad del Estado boliviano. Un país con desigualdades territoriales profundas podría no ser viable, tal vez ni siquiera para la región cruceña que puede verse colmada y colapsada, rodeada de un entorno de animadversión. La historia enseña que una sociedad con grandes asimetrías de crecimiento y de poder es proclive a la inestabilidad estructural, las tensiones y choques internos.

Por todo ello, la idea de un nuevo contrato social es pertinente y necesaria como una opción frente a la polarización destructiva y los riesgos de ingobernabilidad. Son los grandes consensos políticos, sociales y territoriales los que, eventualmente, podrían devolver a los bolivianos a la convivencia pacífica, la cohesión social y regional y a un sistema político dotado de una nueva legitimidad para reconstruir el Estado democrático de derecho, afianzar la estabilidad y el crecimiento sobre nuevas bases económicas y productivas, encarar las reformas institucionales, relanzar el régimen de autonomías y descentralización y, por fin, impulsar un proyecto de modernidad integral de la sociedad boliviana.[33]

Apunte final

Las dificultades para viabilizar un renovado pacto en la sociedad boliviana son innegables. Pero también lo ineludible y decisivo de este desafío. Es la encrucijada en que está Bolivia.

No se trata, claro está, de concebir el contrato social como un hecho puntual sino, más bien, como una sucesión de eventos, pactos y acuerdos mediante los cuales los bolivianos

[33] Sin embargo, los obstáculos que se interponen son significativos. Un ejemplo de ello es la discrepancia profunda que existe entre los bolivianos acerca del sistema de gobierno. Esto lo ha reflejado recientemente una encuesta de la empresa Diagnosis (de 7 de agosto de 2023, reproducida por varios periódicos y plataformas informativas) sobre el mejor modelo de Estado para Bolivia: para la mitad de la población (sobre todo las clases bajas de Occidente, la base electoral del MAS) la mejor opción es el Estado Plurinacional y no parece dispuesta a volver a la República, mientras que la otra mitad (principalmente clases medias, contrarias al régimen) reparte sus preferencias entre volver a la República Unitaria (27 %) o inclinarse por un Estado Federal (20 %), pero coincidiendo en su rechazo al Estado Plurinacional, al que percibe como un Estado al servicio del MAS. Esta polarización de opiniones deja de manifiesto la dificultad de construir un sistema político y de gobierno con suficiente legitimidad por un apoyo mayoritario y consistente de la sociedad.

podamos reencontrarnos y forjar lazos revitalizados de unión. Es decir, ir labrando un consenso mayoritario sobre una idea definida de democracia y, por tanto, de reglas claras de legitimidad política (algo que ha faltado en el pasado, y sigue faltando en el presente). Sin un acuerdo amplio sobre la dirección en que debe moverse la economía y se debe reordenar el sistema político -con un liderazgo visionario, perseverante y sagaz para navegar en aguas turbulentas-, la política boliviana seguirá tropezando con escollos insalvables. Y si el orden y la estabilidad no pueden alcanzarse por el diálogo y el entendimiento, o imponerse por la fuerza, probablemente irrumpa un escenario caótico, incluso catastrófico.

Según un viejo proverbio chino: "la mejor época para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora".

Bibliografía

BOCARA, B.: *Bolivia: revirtiendo traumas*. CERES-Plural editores, 2013.

FUKUYAMA, F.: *Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento*. Ediciones DEUSTO, Barcelona, 2019.

HARARI, Y.N.: *Homo Deus. Breve historia del mañana*. Debate, México, 2021.

HUNTINGTON, S.P.: *El choque de civilizaciones. Y la reconfiguración del orden mundial*. Ediciones Paidós, México, 1998.

---------: *¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense*. Paidos Estado y Sociedad, México, 2004.

LAPOP-CIUDADANIA: *Auditoria de la democracia. Informe Bolivia 2006. Cultura política de la democracia en Bolivia, 2014: Hacia una democracia de Ciudadanos*. Cochabamba, 2014.

LAZARTE, J.: "Reforma Constitucional: por qué, qué y cómo. Ideas para abrir el debate", En Oporto H. (ed.): *Bolivia, encrucijadas en el siglo XXI. Visiones e ideas para una agenda de país*. Plural editores, La Paz, 2014.

NAÍM, M.: *La revancha de los poderosos. Cómo los autócratas están reinventando la política en siglo XXI*. Debate, Buenos Aires, 2022.

OPORTO, H.: *Buscando el Porvenir en el Pasado: radiografía de la ideología del gobierno del MAS*. Editorial Eureka, La Paz, 2007.

---------: *¿Cómo somos? El carácter nacional de los bolivianos*. Plural editores, La Paz, 2018.

---------: *El cielo por asalto. Cinco ensayos breves sobre política boliviana*. Plural editores, La Paz, 2009.

---------: *El ocaso de un ciclo de hegemonía electoral y la perspectiva de polarización y fragmentación*. Fundación Pazos Kanki, La Paz, 2023.

TAJADURA TEJADA, J.: "¿Federal o plurinacional?". *El País*, Tribuna, 08/08/2017.

ZABALETA, R.: *La formación de la conciencia nacional*, Editorial Los Amigos del Libro, La Paz, 1990.